

Cumplimiento de compromisos internacionales : Paraguay enfrenta demandas ante tribunales internacionales	Titulo
Talavera, Raquel - Autor/a;	Autor(es)
Derechos humanos en Paraguay 2002	En:
Asunción	Lugar
CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay	Editorial/Editor
2002	Fecha
	Colección
CIDH - Comision Interamericana de Derechos Humanos; Derechos humanos; Legislación; Derecho internacional humanitario; Paraguay;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/cde/20121001113640/inter2002.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
 Latin American Council of Social Sciences



Cumplimiento de compromisos internacionales





Paraguay enfrenta demandas ante tribunales internacionales

Raquel Talavera
Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL)

Durante el año 2002 se ha avanzado en la ratificación de importantes instrumentos de derechos humanos, que vinculan al Paraguay a un orden jurídico supranacional protector de los derechos fundamentales. Sin embargo, el Paraguay enfrenta por primera vez demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

INTRODUCCIÓN

El Estado paraguayo es miembro de organizaciones internacionales universales como las Naciones Unidas (ONU) y regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), y en estos ámbitos es Estado parte de varias convenciones, pactos y protocolos internacionales de protección de derechos humanos, que lo obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos y a garantizar su libre y pleno ejercicio (Véase el cuadro anexo).

El *pacta sunt servanda* es el principio de derecho internacional que obliga a los estados a dar cumplimiento de buena fe a sus compromisos internacionales, sin que puedan invocar para su incumplimiento la legislación interna (Art. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969). Sin embargo, aún falta ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que se encuentra en estudio en el Congreso para su aprobación.

No cabe duda de que los tratados de derechos humanos son la guía por la cual los tribunales deben regirse para aplicar procedimientos que aseguren el debido proceso garantizado en múltiples convenciones, y aplicar en sus decisiones los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Así, se compromete el Paraguay en sus instrumentos internacionales a dar un recurso efectivo a quienes han sido lesionados en sus derechos o libertades fundamentales, y a desarrollar las posibilidades de los recursos, así como a cumplir las decisiones en que se haya estimado procedente el recurso. Este remedio judicial debe ser idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos, debiendo el Estado proveer lo necesario para reparar la situación.

CASOS PENDIENTES ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

Caso N° 11.558 - Julián Cubas: Presentado por retardo judicial y falta de reparación de la tortura a la que fue sometido, y por haber estado tres años en una celda de tres por cuatro metros con otros 42 presos sin proceso alguno. Sigue pendiente su proceso judicial. Fue acordada con el peticionario la obtención de un cargo en la administración pública como indemnización en la solución amistosa. En este sentido, se hicieron las gestiones tendientes a la obtención de un puesto para el mismo en la Fiscalía General del Estado, Departamento de Derechos Humanos, donde actualmente está trabajando.

Caso N° 11.559 - Miguel Ángel Soler: Presentado por derecho a la vida, al haber muerto en tortura en época de la dictadura. Parte de la solución amistosa es la compensación; como resultado de las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentó a la CIDH el decreto por el cual se nom-

braba a la señora Mercedes Fernández Grenno de Soler, viuda de la víctima, con el cargo de Segunda Secretaria de la Embajada del Paraguay en Chile, dando así cumplimiento a la promesa hecha por el gobierno nacional. Por otra parte, se ha terminado el juicio civil de ausencia con presunción de fallecimiento, pero continúa el expediente judicial principal sobre el mencionado caso, de querella a los torturadores y asesinos, que se encuentra en la Cámara de Apelaciones en estado de sentencia, aguardándose el resultado del mismo.

Caso N° 11.560 - Agustín Goiburú: Presentado por violación del derecho a la vida. Prosigue su proceso judicial pendiente en la justicia. Como parte de la compensación, su hijo, el señor Rolando Goiburú continúa como funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Caso N° 11.665 - José Mancuello: Presentado por retardo judicial y violación del derecho a la vida. Todavía está pendiente ante la justicia este proceso, aunque ya ha habido sentencias. Prosiguen los trámites para el esclarecimiento del lugar donde se encuentra enterrado, petición hecha por su madre en audiencia ante los representantes de la CIDH, reunión en la que también manifestó su falta de interés en compensaciones económicas por parte del Estado paraguayo.

Caso N° 11.667 - Rodolfo y Benjamín Ramírez: Presentado por violación del derecho a la vida y retardo judicial. Hasta el momento sus cuerpos no han sido encontrados, y mientras tanto sigue el proceso respectivo tanto en la jurisdicción penal como en la civil. Ha habido sentencias condenatorias en segunda instancia.

Caso N° 11.607 - soldado Víctor Hugo Maciel: Fue presentando ante la CIDH por violación del derecho a la vida de un soldado de 15 años. Los peticionarios han solicitado, en el marco de la solución amistosa, la indemnización para los familiares, pensión por fallecimiento, exámenes médicos adecuados y el fin del reclutamiento forzoso y de niños soldados, además del seguimiento del proceso en la justicia ordinaria. Se está cobrando actualmente la totalidad de la pensión y siguen pendientes los otros puntos.

Caso N° 12.000 - Aníbal Miranda: El citado caso se encuentra aún en la primera etapa de su recibo por la CIDH, y el caso no se ha abierto a una solución amistosa. El peticionario solicitó una indemnización de 2,3 millones de dólares americanos, más intereses a partir de junio de 1997. El Estado ha contestado que el pedido indemnizatorio es excesivo y no corresponde a la supuesta violación que se debe encuadrar dentro de la reparación establecida por la Ley N° 838/96 de indemnización a las víctimas de violaciones de derechos humanos, vigente en el ordenamiento jurídico nacional.

Caso N° 11.506 - Waldemar Pinheiro y José Víctor Dos Santos: La CIDH publicó un informe de admisibilidad del caso el pasado año. A través de gestiones realizadas por la Cancillería Nacional, en coordinación con la Di-

rección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo, el Estado paraguayó manifestó, en fecha 3 de febrero del presente año, su predisposición a someterse al procedimiento de solución amistosa, quedando pendiente la respuesta de los peticionarios en tal sentido, decisión que deberá ser comunicada a la brevedad posible a la Comisión Interamericana.

Caso N° 12.296 - Rubén Ayala Bogado: Presentado porque la Corte Suprema de Justicia rechazó varios recursos del peticionario en un juicio de desacato iniciado por el mismo.

Caso N° 12.300 Gerardo Vargas Areco: Presentado por SERPAJ -PY y CEJIL por violación del derecho a la vida. Es el caso de un soldado que fue muerto por torturas mientras cumplía su servicio militar obligatorio, sin haberse castigado aún su fallecimiento. Este caso sigue abierto en proceso de solución amistosa.

Caso N° 12.329 Vicente Ariel Noguera: Presentado por la Asociación de Familiares Víctimas del Servicio Militar (AFAVISEM) en el año 2000. La madre de Vicente Ariel Noguera se encuentra con medidas cautelares concedidas por la Comisión, y manifestó su decisión de retirarse del proceso de solución amistosa.

Petición de Wenceslao Ojeda Miranda: Presentado por un pedido de pensión no satisfecho el año pasado, y aún pendiente de contestación por parte del Estado en su último pedido.

Caso N° 11.836 - Feliciano Orué Coronel: Caso de la dictadura, presentado en el año 1996. En proceso de solución amistosa.

Caso N° 11.865 - Juan Carlos Hrase Von Barga: Presentado por posibles afectados de obras futuras de Yacyretá.

Caso N° 12.313 - Yakye Axa: Presentado por Tierraviva y CEJIL por derecho a la protección judicial del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, se declaró la admisibilidad y se solicitó informe final del Art. 50 de la Convención Americana. En caso de no cumplimiento el caso será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Petición de información Eudoro Olguin y Angel Canziani: Cuestiones comerciales, caso también tramitado en el Centro de Arbitraje en Washington y ya ganado por el Estado paraguayó.

Caso N° 12.330 - Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez Lugo: Caso de dos niños soldados desaparecidos, presentado por violación del derecho a la vida. En el año 2002 los peticionarios se retiraron del proceso de solución amistosa y solicitaron proseguir con los trámites ante el sistema interamericano.

Caso N° 12.358 - Octavio Rubén González Acosta: Caso de la dictadura presentado en el año 2001.

Caso N° 12.359 - Cristina Aguayo Ortiz y otras: Presentado en el año 2001 por violación del derecho a la libertad, privación ilegítima de libertad en caso de las violentas redadas de niños que estaban en la calle.

Caso N° 12.374 - Jorge Enrique Patiño Palacios: Presentado en el año 2001 por alegaciones de retraso judicial. El caso tiene una sentencia en primera instancia en el 2001 que ha sido apelada.

Caso N° 12.375 - Víctor Jorge Reichelt: Caso penal ante la justicia ordinaria.

PARAGUAY ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Paraguay está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos por el incumplimiento de su deber de respetar y garantizar los derechos humanos protegidos en la Convención Americana y la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. Debido a la falta reiterada del Estado paraguayo en cumplir con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos con todos los medios a su alcance, la Comisión inició demandas ante la Corte Interamericana contra el Estado y, por su parte, también los representantes de las víctimas, tal como lo permite el nuevo reglamento de la Corte.

Caso N° 11.666 Instituto de Reeducción del Menor “Panchito López” (Elvio Epifanio Acosta Ocampos y otros contra la República de Paraguay)

La demanda contra la República de Paraguay es consecuencia de las condiciones de vida en la que han sido mantenidos los niños y adolescentes detenidos en el Instituto de Reeducción del Menor “Coronel Panchito López”, y las muertes ocurridas en ese centro penitenciario. Con ocasión de tal situación, el Estado paraguayo es responsable de la violación del derecho a la vida, de la integridad personal, de la libertad personal, de las garantías judiciales, de la protección judicial y de medidas especiales de protección de la niñez consagrados, respectivamente, en los artículos 4, 5, 7, 8, 25, y 19 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con lo establecido en el artículo 1(1) de dicha Convención respecto a la obligación del Estado paraguayo de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.

La denuncia ante la CIDH fue presentada el 14 de agosto de 1996 por los peticionarios. La Comisión introdujo en la Corte la demanda contra el Paraguay el 25 de julio de 2001. La Comisión ha designado al comisionado José Zalaquett y al doctor Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH, como sus delegados en este caso. Los doctores Ariel Dulitzky e Ignacio Álvarez, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, así como la doctora Mary Beloff, consultora de la Comisión, han sido designados para

actuar como asesores legales. Las víctimas son representadas por la Fundación Tekojoja y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El Reformatorio “Panchito López” representó el mantenimiento de un sistema de detención contrario a todos los estándares internacionales respecto a la privación de la libertad de niños y adolescentes debido a las condiciones a las que se sometió a las víctimas, reñidas con su dignidad humana y con su estatus de menores de edad, como consecuencia de la superpoblación, el hacinamiento, la insalubridad, infraestructura inadecuada y número insuficiente de guardiacárceles ineficientemente capacitados. El “Panchito López”, como todo el sistema carcelario en el Paraguay, es contrario a las más elementales consideraciones de humanidad.

Las condiciones inhumanas de detención se vieron agravadas pues el Estado abusó de la utilización de la privación de la libertad en contra de las víctimas, que en el caso de niños y adolescentes debió haberse usado como *ultima ratio*. La privación de libertad, tanto como medida cautelar o como sanción para las personas menores de dieciocho años de edad, debe ser usada en última instancia, de conformidad con la Convención Americana interpretada en conjunto con otras normas internacionales¹.

Como consecuencia directa de las condiciones inhumanas de detención y falta de capacitación del personal de guardia y custodia y la carencia de mínimas medidas de seguridad y prevención, se produjeron diversos incendios que tuvieron consecuencias fatales en varias oportunidades. La repetición de éstos evidenció la falta de prevención con que actuó el Estado; al no erradicar sus causas estructurales. El 11 de febrero del 2000 tuvo lugar el primer incendio del Instituto, en el que fallecieron nueve adolescentes y 23 sufrieron heridas o quemaduras. En el segundo incendio, ocurrido el 5 de febrero del 2001, resultaron heridos otros nueve adolescentes. El tercer y último incendio ocurrió el 25 de julio del 2001. En este resultaron heridos ocho internos y además otro falleció el 6 de agosto del 2001.

Luego de cada incendio, parte o la totalidad de las víctimas, fueron repartidas en las penitenciarias para adultos del país. La gran mayoría de niños y adolescentes desplazados a las penitenciarias de adultos continúan sin condena, esta vez con el agravante de que se encuentran dispersos por el territorio nacional, alejados de sus defensores legales y sus familiares. El internamiento de niños y adolescentes en cárceles de adultos ha sido utilizado repetidas veces por el Estado paraguayo como medio para remediar sus propias fallas en la falta de planificación del sistema carcelario nacional.

¹ En particular la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Caso 12.032 - Ricardo Canese contra la República del Paraguay

El 12 de junio del 2002 el Estado paraguayo fue demandado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, demanda fundada en que el Paraguay incumplió su obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y con ello violó el artículo 13 de la Convención Americana en perjuicio de Ricardo Canese, al usar el sistema coercitivo penal y la imposición de una pena privativa de libertad como consecuencia del ejercicio de este derecho. Asimismo, la Comisión argumenta que el Paraguay incumplió su obligación de respetar y garantizar el derecho a las garantías judiciales y con ello violó el artículo 8 de la Convención, debido a la demora injustificada en el proceso y a la restricción para abandonar el país por un largo periodo de tiempo. Además, el Paraguay incumplió su obligación de respetar y garantizar el principio de legalidad y retroactividad (artículo 9 de la Convención), al no aplicar la norma más favorable que contiene el nuevo Código penal. La Comisión concluyó solicitando se condene al Estado paraguayo a una reparación por haber incurrido en estas violaciones a los derechos de Ricardo Canese.

Actúan en representación de la víctima el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), el Sindicato de Trabajadores de la Asociación Nacional de Electricidad (SITRANDE), sus abogados Alberto Nicanor Duarte y Pedro Almada Galeano, con el respaldo y participación del CEJIL.

EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es importante la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y una vez incorporadas por el Estado a su legislación positiva, aplicarlos positivamente, en particular mediante la adecuación de las normas de derecho interno (leyes, decretos, sentencias judiciales, etc.) a lo que ellos disponen.

La jerarquía de los tratados está determinada en el artículo 137 de la Constitución, que establece que

“la ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional, en el orden de prelación enunciado”. Los tratados están entonces por encima de los códigos y leyes aprobados por el Congreso.

Por otra parte, la Constitución de 1992 equiparó a su propia jerarquía, en cuanto a estabilidad se refiere, en el artículo 142, a los tratados relativos a

derechos humanos, ya que éstos «no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de la Constitución».

La recepción constitucional del derecho internacional de los derechos humanos trae aparejada que las violaciones al mismo conlleven paralelamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de tal violación y la responsabilidad internacional del Estado. Esto adquiere particular importancia en el caso de tratados que crean mecanismos de supervisión y control. Todos estos procedimientos suelen exigir como requisito previo a su puesta en funcionamiento, el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, salvo que se puedan amparar en las excepciones como retardo injustificado de justicia, o impedimentos para agotar estos recursos o la inexistencia de recursos idóneos dentro del derecho interno. De modo que, prácticamente en todos los casos de denuncias internacionales por violación a los derechos humanos, estará implicado algún tribunal nacional que ha fallado en la obligación de garantizar el efectivo goce de los derechos reconocidos.

Los Estados parte de las convenciones internacionales de derechos humanos pueden ser entonces responsables por acción u omisión; inmediata cuando sus órganos o agentes violan los derechos de la persona humana, o mediata cuando en presencia de atentados a los derechos y libertades de la persona humana por acción u omisión de particulares, faltan a la debida diligencia para prevenir la violación. La actuación de organismos de control tiene lugar cuando el propio Estado omite dar cumplimiento a su deber de garantía, es decir, no previene, investiga o sanciona las violaciones de derechos humanos que tienen lugar dentro de su propia jurisdicción.

Este año, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentó un importante precedente en cuanto a exigibilidad de la normativa internacional cuando ésta forma parte del derecho positivo, al fallar en una acción de inconstitucionalidad sobre restitución internacional de menores, fundamentando que “el procedimiento originado por exhortos provocó diligencias que no son propias del procedimiento de restitución internacional, desnaturalizándolo y dilatándolo excesivamente en desmedro de los derechos del menor”. Entre los fundamentos se menciona la Constitución Nacional, el Protocolo de San Salvador (Art. 16), el Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (Ley N°983/96), la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores (Ley N° 928/96), la Convención sobre Derechos del Niño (Ley N° 57/90), y la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros (Ley N° 889/96)².

² Corte Suprema de Justicia. Acuerdo y Sentencia N° 116 de 4 de noviembre de 2002. Acción de inconstitucionalidad en el juicio “Exhorto Pereira María por Berensend Laura Magalí y María Clara Berensend Pereira, ratificación de tenencia Año 2002- N°1264. El fallo tuvo como preopinante al ministro Luis Lezcano Claude y la adhesión de los ministros Raúl Sapena Brugada y Carlos Fernández Gadea.

RECOMENDACIONES

- Exigir en los tribunales nacionales la aplicación de la normativa internacional de protección de los derechos humanos, y agotadas las instancias internas recurrir al Sistema Interamericano y o al sistema de protección de Naciones Unidas.
- Proceder a un allanamiento y solicitar cooperación y asistencia para cumplir con las sentencias de reparaciones desde la perspectiva integral, en los casos en que Paraguay está demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Incluir en los programas educacionales en escuelas, colegios, cursos regulares y superiores de enseñanza de los diferentes órganos del Estado, programas de estudio de la Protección Internacional de los Derechos Humanos, haciendo conocer los instrumentos de derechos humanos ratificados por el Paraguay y los mecanismos de exigibilidad a las FF AA, la Policía Nacional, la Academia Diplomática, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento.

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Paraguay al 30 de octubre de 2002

Sistema de Naciones Unidas

Instrumento	Firma	Ratificación
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio	Nueva York 11/12/1948	Ley N° 1748 14/08/2001
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial	Nueva York 13/09/2000	Mensaje N° 527 del 2/08/2001
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Adhesión	Ley N° 4 09/04/1992
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Adhesión	Ley N° 5 09/04/1992
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Adhesión	Ley N° 400 26/08/1994
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	Adhesión	Ley N° 1.215 28/09/1986
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	Nueva York 28/12/2000	Ley N° 1.683 25/04/2001
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	Nueva York 23/10/1989	Ley N° 69/90 23/01/1990
Artículos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes		Ley N° 1.886 6/05/2002
Convención sobre los Derechos del Niño	Nueva York 4/04/1990	Ley N° 57 20/09/1990
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados	Nueva York 13/09/2000	Ley N° 1.897 27/05/2002
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía	Nueva York 13/09/2000	Mensaje N° 626 del 13/12/ 2001
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a Abolir la Pena de Muerte	Adhesión	Mensaje N° 596 del 7/11/2001
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.	Nueva York 13/09/2000	En trámites para remitir al Congreso
Acuerdo por el que se establece el Fondo para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas de América Latina y el Caribe	Madrid 24/05/1992	Ley N° 370 28/06/1994

Convención sobre el Estatuto de Refugiados	Adhesión	Ley N° 136 11/10/1969
Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados	Adhesión	Ley N° 136 11/10/1969
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer	Nueva York 16/11/1953	Ley N° 54 16/01/1990
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes	Adhesión	Mensaje N° 604 del 20 /11/2001
Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos	Nueva York 25/10/1974	Ley N° 529 3/10/1975
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado	Sin datos	En trámites para la remisión al Congreso
Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas	Sin datos	Mensaje N° 585 del 29/10/2001
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional	Roma 7/09/1998	Ley N° 1.663 17/04/2001
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	Italia-Palermo 12/12/2000	En trámites para la remisión al Congreso
Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.	Italia - Palermo 12/12/2000	En trámites para la remisión al Congreso
Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores	Adhesión	Ley N° 983 7/11/1996
Convención relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional	Adhesión	Ley N° 900 31/07/1996

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Instrumento	Firma	Ratificación
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). El 26 de marzo de 1993, Paraguay depositó el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	San José, Costa Rica 22/11/1969	Ley N° 1 18/08/1989
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)	San Salvador, El Salvador 17/11/1988	Ley N° 1.040 16/04/1997
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte	Adopción Asunción 8/06/1990	Ley N° 1.557 6/06/2000
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas	Belém Do Pará 8/11/1995	Ley N° 933 13/08/1996
Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura	Cartagena 25/10/1989	Ley N° 56 16/01/1990
Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Civiles de la Mujer	Bogotá 2/05/1948	Ley N° 104 28/06/1963
Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos a la Mujer	Bogotá 20/08/1951	Ley N° 876 28/06/1963
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención De Belem Do Pará)	Belem Do Pará 17/01/1995	Ley N° 605 21/06/1995
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias	Montevideo 15/07/1989	Ley N° 899 31/07/1996
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores	Montevideo 15/07/1989	Ley N° 928 20/08/1996
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores	México 7/08/1996	Ley N° 1.062 16/06/1997
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad	Guatemala 6/08/99	Ley N° 1.926 19/06/02
Convención Relativa a los Congresos Indigenistas Interamericanos y al Instituto Indigenista Interamericano	Adhesión	Depósito 17/06/1941

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Instrumento	Firma	Ratificación
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Modificaciones de 1928, 1945, 1946, 1953, 1962 y 1972. Otros reglamentos.	París, Francia 1919	Ley N° 448 12/08/1957
Convenio sobre la Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación	Adhesión	Ley N° 748 31/08/1961
Convención sobre la Igualdad de Remuneración	Adhesión	Ley N° 925 29/05/1964
Convenio Relativo a los Métodos para la fijación de Salarios Mínimos en la Agricultura	Adhesión	Ley N° 926 29/05/1964
Convenio Relativo al establecimiento de métodos para la fijación de Salarios Mínimos (Convenio 26)	Adhesión	Ley N° 924 3/06/1964
Convenio Relativo a la Protección del Salario	Ginebra, Suiza 8/06/1949	Ley N° 935 23/06/1964
Convenio Relativo a las Vacaciones Pagadas Anuales	Adhesión	Ley N° 944 10/07/1964
Convenio por el que se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a 8 horas diarias y a 48 horas semanales	Adhesión	Ley N° 946 15/07/1964
Convenio Relativo a la aplicación del Descanso Semanal en las Empresas Industriales	Adhesión	Ley N° 945 15/07/1964
Convenio Relativo a la reglamentación de las horas de trabajo en el Comercio y en las oficinas	Adhesión	Ley N° 942 15/07/1964
Convenio Relativo a las Vacaciones Pagadas en la Agricultura	Ginebra, Suiza 26/06/1952	Ley N° 943 15/07/1964
Convenio Relativo al Descanso Semanal en el Comercio y en las oficinas	Ginebra, Suiza	Ley N° 947 15/07/1964
Convenio sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva	26/06/1957	Ley N° 977 27/08/1964
Convenio Relativo a la Protección de los Trabajadores contra las Radiaciones (Convenio N° 115)	Adhesión	Ley N° 1155 29/06/1966
Convenio sobre la Discriminación de Empleo y Ocupación	Ginebra, Suiza 22/06/1960	Ley N° 1.154 21/07/1966
Convenio Relativo a la Protección de la Maquinaria (Convenio N° 111)	Adhesión	Ley N° 1.179 31/08/1966
Convenio Relativo a la Inspección del Trabajo en la Industria y el Comercio (Convenio 81)	Ginebra, Suiza 25/06/1963	Ley N° 1235 21/06/1967
Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (Convenio N° 29)	Adhesión	Ley N° 1.234 28/08/1967
Convenio Relativo a los Derechos de Asociación y Coalicción de los Trabajadores Agrícolas	Adhesión	Ley N° 1333 4/12/1967

Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (Convenio N° 105)	Adhesión	Ley N° 1331 4/12/1967
Convenio Relativo a las Normas y Objetivos de la Política Social	Adhesión	Ley N° 66 19/12/1968
Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes	Ginebra, Suiza 22/06/1962	Ley N° 234 19/07/1993

Derecho Internacional Humanitario

Instrumento	Firma	Ratificación
Convención sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz	Buenos Aires (Conferencia Interamericana de Consolidación de La Paz) 23/12/1936	Ley N° 11 29/11/1938
Convención de Ginebra relativa a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra	Ginebra 12/08/1949	Ley N° 693 30/09/1960
Convención de Ginebra para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra	Ginebra 12/08/1949	Ley N° 693 30/09/1960
Convención para mejorar la suerte de los Heridos, Enfermos y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar	Ginebra 12/08/1949	Ley N° 693 30/09/1960
Convención para mejorar la suerte de los Heridos, Enfermos y Náufragos de las Fuerzas Armadas en Campaña	Ginebra 12/08/1949	Ley N° 693 30/09/1960
Protocolo Adicional relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)	Ginebra 8/06/1977	Ley N° 28 20/08/1990
Protocolo Adicional relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo II)	Ginebra 8/06/1977	Ley N° 28 20/08/1990